

| | |
|---|-------------------|
| La acción colectiva en Bolivia. Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998 | Título |
| Villarroel Nikitenko, Miguel - Autor/a | Autor(es) |
| Crisis y conflicto en el capitalismo latinoamericano: Lecturas políticas | En: |
| Buenos Aires | Lugar |
| CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Editorial/Editor |
| 2002 | Fecha |
| | Colección |
| política; crisis; Conflictos sociales; Bolivia; Caribe; | Temas |
| Capítulo de Libro | Tipo de documento |
| http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/clacso/becas/20110111071303/6nikitenko.pdf | URL |
| Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es | Licencia |

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO

<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)

Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)

Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)

www.clacso.edu.ar



Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
Latin American Council of Social Sciences



La acción colectiva en Bolivia

Cambio y transformación de los conflictos sociales 1970-1998

Miguel Villarroel Nikitenko*

No es posible equivocarse si afirmamos que todas las sociedades humanas, pasadas y presentes, al estar basadas en relaciones sociales, son conflictivas. Sin embargo, esto de por sí no debe verse como algo negativo o un problema. A lo largo de la historia, los conflictos han sido muchas veces el motor de pequeños y grandes cambios y avances en la estructura social. El conflicto se halla siempre presente dentro de la sociedad: ello es así aunque muchas veces éste no sea percibido o permanezca oculto. Un conflicto expresa una diferencia de intereses o visiones entre dos partes claramente diferenciadas, y sólo se hace visible cuando las tensiones acumuladas han llegado a un punto máximo o clímax. Esta irrupción normalmente ocurre cuando han fracasado o son imposibles mecanismos alternos que logren satisfacer las aspiraciones o demandas de los actores involucrados.

Los conflictos sociales, al ser producto de y a la vez estar mediados por relaciones de poder, deben por ello ser siempre percibidos y explicados dentro de estas mismas relaciones. Más aún, el conflicto expresa en gran medida el estado de la correlación de fuerzas de los actores sociales enfrentados en un momento dado. Los conflictos también son una rica fuente de conocimiento, pues nos permiten visualizar los problemas y desigualdades que aquejan a una sociedad, así como la falta o debilidad de mecanismos institucionales que permitan resolverlos antes de su eclosión o visibilización, que por lo general conlleva cierta dosis de violencia o por lo menos afecta la “normalidad” de la vida cotidiana.

Claros están pues los beneficios que conlleva la atenta observación y estudio de la conflictividad social. Es con esta visión que el presente trabajo realiza un seguimiento de los conflictos sociales en Bolivia durante el lapso de ca-

* Egresado de la carrera de sociología, Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. Fue asistente de investigación del programa Concertación y Manejo Democrático de Conflictos que se ejecuta en CERES. Actualmente se desempeña como consultor del programa de Fortalecimiento a la Investigación en Desarrollo Social (SDRC) en la misma institución.

si treinta años. El objetivo general es, pues, tratar de identificar cuáles han sido los principales cambios y transformaciones de la acción social colectiva en Bolivia durante este período de tiempo, y a la vez explicarlos a partir de las diferentes coyunturas históricas que les dieron forma y sustento.

En lo que sigue, primero se hará una breve explicación sobre la forma de construcción del objeto de estudio y la metodología empleada en la presente investigación. Seguidamente se mostrará, a grandes rasgos, cuáles han sido los tres principales referentes –tipos de estado– en los cuales se han desenvuelto las acciones sociales conflictivas durante el siglo XX.

En el tercer acápite se muestra cuáles son las principales características de los conflictos sociales en Bolivia de manera general y sintética durante todo el período de estudio. En la cuarta parte se verá cuáles fueron los rasgos más sobresalientes, en cuanto a conflictividad social, en cada uno de los siete períodos estudiados. Será finalmente en la quinta parte donde se verá cuáles fueron los principales cambios y persistencias en los conflictos sociales en Bolivia.

Objeto de estudio y metodología

Durante las tres últimas décadas Bolivia ha atravesado profundas transformaciones políticas, sociales y económicas, que han reconfigurado los escenarios y reglas de juego dentro de los cuales se desarrolla la acción colectiva. Por tanto, sería de esperarse que se hayan transformado, al menos en parte, el carácter y el contenido de estas acciones, así como también que se hayan operado cambios en los protagonistas de las mismas. En consecuencia, y como ya se indicó en el anterior acápite, este estudio pretende señalar cuáles han sido estas transformaciones y cambios, así como tratar de explicarlos a partir de las diferentes coyunturas históricas que los hicieron posibles entre los años 1970 y 1998.

Para lograr este objetivo se utilizarán los datos contenidos en la base electrónica de conflictos sociales elaborada por el CERES¹. Esta base de datos fue construida a partir del registro que hizo la prensa nacional de los eventos conflictivos en el país. Estos datos recogen de manera sintética las principales características de los hechos sociales conflictivos registrados entre el 1 de enero de 1970 y el 31 de julio de 1998.

En el trabajo de CERES, y en consecuencia también en éste, se catalogó como “conflicto” a aquellos hechos sociales que presentaban una clara movilización de los actores sociales (por lo general con cierto grado de violencia), o por lo menos cuando se estaba muy cerca de la toma de acciones “de hecho” (por ejemplo, estado de emergencia), ello con la finalidad de lograr que se les atiendan sus demandas o reclamos. No se tomaron en cuenta aquellas manifestaciones sociales que, aunque no movilizan de manera explícita a los actores involucrados en ellas, son una señal de conflictos latentes o de la emergencia de otros nuevos, así como también pueden constituirse en formas específicas de acción para ciertos grupos sociales (por ejemplo denuncias, aclaratorias, solicitadas, etc.).

Otro punto a tomarse en cuenta es que en la base electrónica del CERES cada caso, evento o registro hace referencia a una acción social conflictiva en todo su proceso o desarrollo. En otras palabras, no se toman en cuenta (aunque sí se registran) la duración y la cualidad o magnitud de un conflicto. Así, por ejemplo, si los datos señalan que en el mes de mayo de 1994 hubo ochenta y tres eventos conflictivos, ello significa ochenta y tres eventos nuevos. Considerando que muchos conflictos pueden durar varios días, e incluso semanas, es lógico suponer que en ese mismo mes de mayo hubo muchos más conflictos, pues algunos de ellos habrían podido comenzar el mes anterior o antes. De la misma manera, los datos no permiten diferenciar una marcha de vecinos de media hora de duración de una marcha campesina que involucre a varios miles de participantes y que tenga una duración de varios días.

A pesar de dichas limitaciones, esta base de datos permite una visión generalizadora y amplia de la acción social conflictiva en Bolivia, así como también posibilita vislumbrar aquellas similitudes, regularidades y especificidades que de otro modo podrían pasar desapercibidas.

En términos generales, la base de datos del CERES comprende 7.647 eventos a los cuales también se denominará con los apelativos de 'acciones sociales conflictivas' o 'conflictos'. Las variables más importantes trabajadas en ella son: grupo social líder del conflicto, adversario o interlocutor, objetivo del conflicto, método de lucha o forma del conflicto, resultado del conflicto, y duración del conflicto.

Para todas estas variables existen otras que permiten su ubicación espacio-temporal en forma bastante detallada (por ejemplo departamentos, ciudades principales, ámbito urbano o rural, etc.).

Paralelamente al análisis de la información extraída de esta base de datos, la reflexión se ha visto enriquecida con información secundaria proveniente de trabajos previos en la temática de conflictos o movimientos sociales, así como otros referidos a las diferentes coyunturas políticas, sociales y económicas que comprende el estudio.

Modelos de estado en Bolivia en el siglo XX

La lógica estatal o tipo de estado en el cual se desarrollan los conflictos sociales tiene una importancia capital en estos últimos. Si entendemos al estado como al conjunto de disposiciones legales y normativas, así como a determinadas formas que regulan la actividad económica, política y del ejercicio del poder del conjunto de la sociedad, entonces queda claro que las diferentes formas que pueda adoptar éste (feudal, benefactor, neoliberal, etcétera) constituyen el principal referente y establecen las "reglas de juego" dentro de las cuales deben, obligatoriamente, ponerse de manifiesto todas las tensiones sociales y eventualmente su estallido: los conflictos sociales.

El período de estudio de los conflictos en el presente trabajo empieza en 1979. No obstante, es menester hacer algunas breves puntualizaciones sobre la

evolución del estado boliviano a lo largo del siglo XX. Esta necesidad de dotar a los conflictos de un contexto histórico de mayor alcance que el que corresponde a los datos recogidos obedece al hecho de que la lógica de los conflictos (la forma que adoptan, el tipo de problemas y reclamos que plantean, la forma en que se solucionan, etc.), y en general la cultura política de una sociedad, tienden a cambiar con menor rapidez que las estructuras sociales en las que se desenvuelven². Este fenómeno es común a todas las manifestaciones culturales de una sociedad, y los conflictos también son un producto cultural de la misma.

Bolivia entra al siglo XX bajo la lógica de un *estado oligárquico*. Dos son las principales características de este período: la existencia de latifundios señoriales como medio preponderante de propiedad de la tierra y, por otro lado, una economía estatal basada en la minería de la plata y del estaño. La forma en que estaba organizada la explotación minera, y la gran cantidad de mano de obra que requería, dieron lugar a un hecho de trascendental importancia: el nacimiento del sindicato minero. No pasó mucho tiempo antes de que estos sindicatos tuvieran una fuerte militancia partidaria, sobre todo marxista y anarquista. Pero fue la Guerra del Chaco (Bolivia-Paraguay 1932-1935) una de las principales razones por las que los sindicatos cobraron mayor relevancia y peso en el escenario nacional. Este conflicto bélico coincidió con el punto más álgido de la crisis del modelo económico y de dominación oligárquica en el país.

Así, en el campo de batalla se encontraron los campesinos, antes dispersos, con los obreros, las capas medias y demás clases populares, surgiendo entre todos ellos, diferenciadamente por supuesto, un sentimiento de solidaridad que produjo un creciente sentimiento nacionalista y anti-imperialista, cuyos efectos se hicieron notar posteriormente (Calderón y Szmukler, 2000: 33).

Es probable que estos hechos, sumados a la migración campesina hacia los centros mineros y el posterior retorno de algunos de los campesinos migrantes a sus comunidades, incidieran positivamente en la organización del sindicalismo campesino a finales de este período.

En suma, a comienzos de la década del '50, el sindicato asumió un papel articulador de las relaciones sociales y políticas. En realidad es todo el movimiento popular el que durante estos años alcanza un alto grado de generalidad en sus objetivos, y por primera vez se vislumbra como poseedor de una base netamente política (Calderón y Laserna, 1983: 6).

La profunda crisis del estado oligárquico y la emergencia de fuerzas contestatarias a este tipo de dominación condujeron a la llamada Revolución Nacional de 1952. Las transformaciones que se dieron a raíz de esta revolución modificaron por completo el carácter del estado y de la sociedad boliviana: así, a este segundo período se lo conoce como el *estado del '52*, o *estado de bienestar*.

Este período dio inicio y desarrollo a un capitalismo de estado. Dentro de este modelo, el estado se atribuía el principal papel en la generación y distribución del excedente económico, ejerciendo de esta forma un control directo de las principales actividades económicas, que por la época se hallaban liga-

das a la extracción y venta de recursos naturales. Por otro lado, se abrieron paso nuevas formas de dominación social y económica, entre las cuales primaban los sectores vinculados a la minería en la zona andina y a los industriales y productores agropecuarios de la zona llana u oriental boliviana.

En un principio la Revolución Nacional fue un extraordinario intento por modernizar Bolivia dentro el marco de los avances y progresos más importantes de la humanidad hasta mitades del siglo XX. El objetivo más importante era, sin duda, la construcción de un estado nacional que represente, regule y abarque a todos los habitantes y llegue a todos los rincones patrios. En este sentido se dieron importantes acciones y cambios, como la nacionalización de las minas, destrucción del ejército y creación de milicias populares, reforma agraria, educativa y urbana, universalización del voto. Ahora bien, la mayor parte de estas medidas no fueron “fruto de una acción homogénea de la alianza en el poder sino, por el contrario, de fuertes enfrentamientos sociales en torno a la forma de su implementación y desarrollo” (Calderón y Szmukler, 2000: 53).

Otra de las características del estado del '52 fue su carácter notoriamente patrimonialista corporativista. Prácticamente todos los procesos económicos y sociales estaban fuertemente controlados por el estado, centralizado en La Paz, que poseía casi la totalidad de las empresas estratégicas nacionales. La característica principal de las relaciones entre el estado y la sociedad civil durante este período fue su carácter clientelar burocrático, el cual operaba como “un sistema de redes de influencia que compiten y disputan el control sobre el flujo de prebendas en el Estado” (Calderón y Laserna, 1995: 28).

Ahora bien, no en vano a esta revolución –y al tipo de estado que trajo aparejada– también se la conoce como la Revolución Inconclusa. Y es que ella no pudo materializar la mayor parte de los propósitos por los cuales se había erigido, sobre todo aquellos que tenían que ver con darle un rostro más moderno al estado y al país en general. El tema institucional fue una de estas carencias, pues éstas parecían no existir o adolecían de graves problemas en áreas tales como la jurídica, laboral, administrativa y política. Por el contrario, paulatinamente se dio un proceso de faccionalismo sociopolítico como consecuencia de conflictos al interior del propio estado. Los movimientos regionales, liderados por las élites locales, también ayudaron al deterioro de este tipo de estado, pues cuestionaban el centralismo del poder y reclamaban una mayor autonomía respecto de éste. En consecuencia, se dieron las condiciones que llevaron a la gestación de un círculo vicioso entre ingobernabilidad sociopolítica e inestabilidad económica (Calderón y Laserna, 1995: 26).

Una vez más, la desintegración del tejido social e institucional y un proceso de crisis económica hiperinflacionaria conllevan a la agudización de los conflictos entre la sociedad civil y el estado hasta un punto de franca ingobernabilidad, el cual sólo cesaría en el año 1985 con la implementación de la Nueva Política Económica (NPE), hecho que inaugura el *estado neoliberal* en Bolivia.

La NPE tenía como objetivo inmediato equilibrar las variables macroeconómicas a través de la implementación de políticas que pudieran reducir rápida y drásticamente la inflación y el déficit fiscal y estabilizar la economía

nacional, disminuyendo el rol regulador del estado (Calderón y Szmukler, 2000: 266). Ello implicaba ajustarse a una economía de mercado, donde ésta pasa a ser el principal protagonista, en tanto que el estado ve achicadas sus funciones e interviene sobre todo para controlar, negociar o reprimir las reacciones sociales ante tales ajustes.

Si bien se lograron estabilizar los principales indicadores macroeconómicos, la aplicación de este modelo también significó un nuevo repunte de las protestas sociales. Las medidas de ajuste estuvieron basadas en una reorganización –disminución– del gasto fiscal basada en el despido masivo de empleados del sector público, congelamiento de los salarios, aumento tributario y de los combustibles, reducción de los gastos en inversión social (salud, vivienda, educación, etc.) y reestructuración o venta de las empresas públicas y de la banca estatal.

Tampoco se logró con este modelo la reactivación económica prevista. El sector privado, blanco de las esperanzas de este tipo de estado, no pudo modernizarse lo suficiente como para integrarse al circuito comercial internacional. Esto se debió, en gran medida, a la notoria ausencia del estado al momento de elaborar y llevar adelante planes de apoyo y reactivación sectoriales.

En el ámbito social, se pudo observar el debilitamiento de gran parte de quienes habían sido hasta entonces los principales actores y protagonistas de la sociedad civil en materia de movimientos sociales y sobre todo en la tarea de la recuperación de la democracia en los largos años de las dictaduras militares. Los partidos políticos se consolidaron como los medios legítimos e institucionales más importantes para la canalización de las demandas de la sociedad civil. Pero también se pudo observar –hecho que continúa hasta el presente– la aparición de nuevos actores, algunos de ellos inducidos, por ejemplo y muy especialmente, por la promulgación de la Ley de Participación Popular, que por primera vez incluye y permite la participación de sectores de la sociedad civil antes ignorados. Otros actores sociales se han visto “obligados” a constituirse como tales como consecuencia de las fallas y las carencias de adecuados mecanismos de intermediación entre el estado y la sociedad civil, principalmente a partir del debilitamiento de quienes tradicionalmente cumplían estas funciones (sindicatos, comités cívicos, etc.)

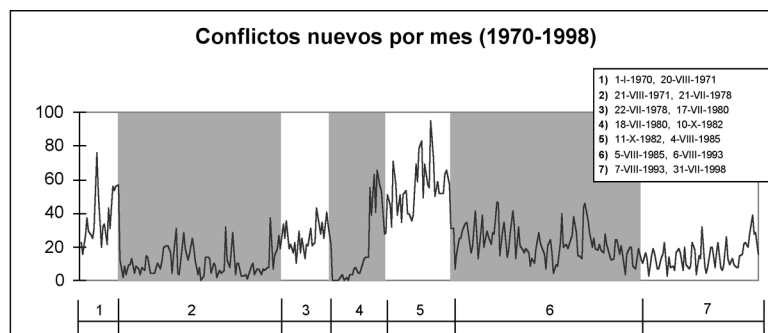
Han sido, en resumen, tres los tipos de estado que Bolivia ha tenido durante el siglo XX: oligárquico, benefactor o del ‘52, y neoliberal. Ya se ha visto cuáles han sido sus principales características, sobre todo aquellas que cobran relevancia como contexto de los conflictos sociales que son el objeto del presente estudio. Veamos pues, a continuación, mayores detalles sobre dichas acciones colectivas.

Rasgos generales de los conflictos (1970-1998)

En este capítulo se verá de manera sintética y general, y desde un punto de vista cuantitativo, cuáles han sido las principales características de los

conflictos sociales en Bolivia durante el período de estudio. Con esta finalidad, veamos a continuación el Gráfico 1.

Gráfico 1

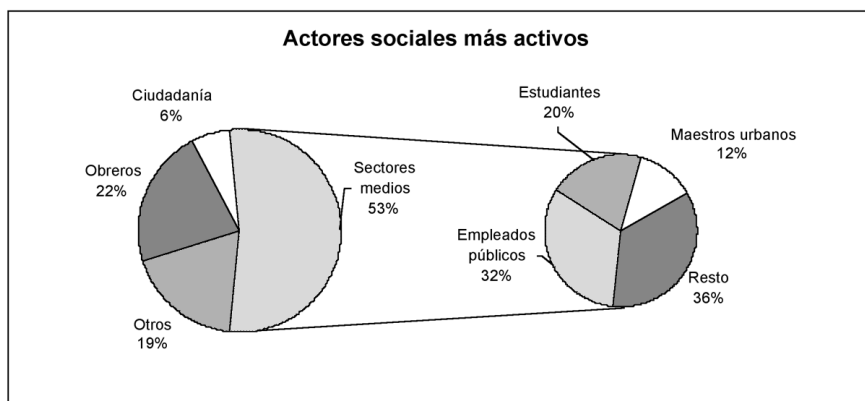


Fuente: elaboración propia, base de datos de conflictos sociales del CERES.

Tenemos pues que entre 1970 y julio de 1998 se han podido registrar 7.647 eventos conflictivos mediante la prensa. En el gráfico se indica la cantidad de conflictos nuevos mes a mes durante todo este lapso de tiempo. Ya en este punto es posible notar que existe una cierta correlación entre los diferentes momentos históricos que vivió Bolivia y la frecuencia con que se suscitan las reacciones de la sociedad ante éstos. Sólo como un ejemplo, notemos la extraordinaria diferencia que existe entre los periodos 4 y 5. El primero corresponde a una de las más feroces dictaduras vividas por este país. La falta de libertades civiles se hace patente en el hecho de que este período registra el promedio más bajo de conflictos, sobre todo en su primera parte –casi cero. En contraste, el siguiente período detenta el nivel más alto de conflictividad alcanzado dentro los límites de este estudio –más de noventa eventos nuevos en algunos meses. Fue también en esta etapa que se vivió el retorno a la democracia, y paralelamente una de las crisis económicas y sociales más fuertes de los últimos años. De manera un tanto rápida se puede afirmar que el promedio general de conflictos registrados en la prensa tiende a elevarse en democracia y a disminuir en dictaduras, y ello es así porque el conjunto de libertades y derechos ciudadanos que la democracia garantiza posibilita una mayor visibilización de las tensiones sociales mediante acciones sociales conflictivas.

El siguiente gráfico nos presenta un panorama de cuáles han sido los principales protagonistas de estas acciones conflictivas.

Gráfico 2

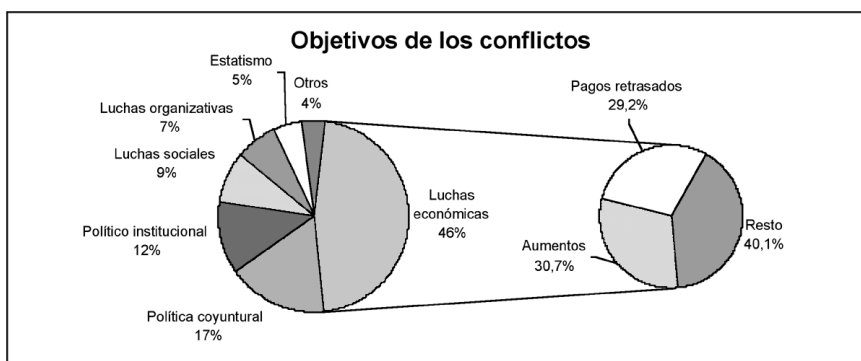


Fuente: elaboración propia, base de datos de conflictos sociales del CERES.

La denominación de 'sectores medios'³ corresponde a una amplia franja del espectro social. En ella se ha incluido a los maestros urbanos y rurales, bancarios, estudiantes, empleados públicos, trabajadores y docentes universitarios, empleados del sector privado, pequeños comerciantes y transportistas, entre otros. Coincidentemente, a este grupo corresponden la mayor parte de las acciones sociales conflictivas registradas en este estudio (53%). Los obreros ocupan el segundo lugar de importancia (22%), en tanto que el grupo denominado 'ciudadanía' (población urbana no claramente diferenciada o muy heterogénea, como por ejemplo comités cívicos) ha sido responsable por el 6% de todos los conflictos registrados en el país durante el período de estudio.

Los objetivos o motivos que dieron lugar a estos conflictos se hallan resumidos en el siguiente gráfico.

Gráfico 3



Fuente: elaboración propia, base de datos de conflictos sociales del CERES.

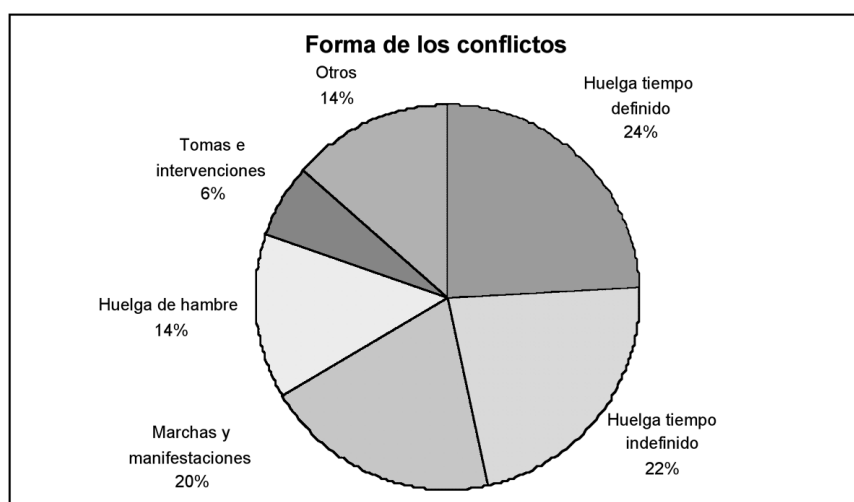
Aunque un conflicto puede ser motivado por más de una razón, por regla general una de ellas es más importante que las otras. Es decir, el conflicto tie-

ne un “objetivo principal”. El gráfico precedente refleja este último caso. Se percibe claramente que los temas económicos son el principal problema y la preocupación de la población boliviana (46% de los casos). La denominada política coyuntural (en torno a disposiciones gubernamentales específicas, o para mostrar apoyo o rechazo a las mismas) va en segundo lugar de importancia, con el 17% de los casos. También han sido importantes las luchas de tipo político-institucional (12% del total), es decir aquellas que se preocupan por las libertades democráticas, la defensa de los derechos humanos o el respeto por las leyes, normas, reglamentos y acuerdos.

En términos generales, el destinatario o adversario de la mayor parte de estas acciones fue el estado al nivel central (63,4%). Pero si tomamos en cuenta las acciones dirigidas en contra de otras reparticiones e instituciones estatales, como las de nivel local (prefecturas, alcaldías, etc.) que fueron el 12,6% del total, los aparatos represivos del estado (FF.AA., policía) con el 0,9%, y las empresas estatales (9,4%), nos encontramos ante el hecho de que más del 86% de los conflictos quisieron tener como contrincante al estado en alguna de sus facetas. En contraste, la empresa privada fue considerada blanco de las acciones conflictivas solamente el 5,4% de las veces. Indudablemente esto nos señala algunas características importantes de la formación social boliviana y su cultura política, las cuales aún corresponden en gran medida a las heredadas de la lógica centralista/patrimonialista/clientelista del estado del ‘52. Trataremos de ver más adelante si los cambios producto del advenimiento del estado neoliberal en 1985 han producido una modificación en estas pautas de relacionamiento y de visualización de los problemas que los diferentes actores sociales tienen.

Pero ¿de qué manera se expresan los bolivianos durante un conflicto social? El siguiente gráfico procura aclarar este asunto.

Gráfico 4



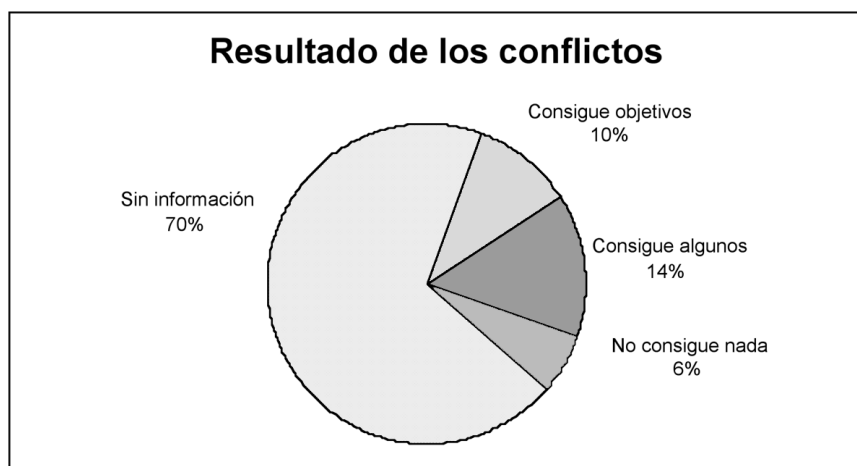
Fuente: elaboración propia, base de datos de conflictos sociales del CERES.

Al igual que en el caso de los factores que desencadenan un conflicto, la forma en que estos se expresan puede adoptar más de una modalidad, ya sea simultánea o consecutivamente. También aquí se ha tratado de identificar cuál fue el método de lucha principal utilizado durante el transcurso de los conflictos sociales. Se destacan como mayoritarias las manifestaciones de adhesión pasiva (se deja de hacer lo habitual), ya que suman el 53,5% de todos los casos; entre ellas descuellan las huelgas por tiempo definido (24% del total) y las huelgas por tiempo indefinido (22%), y de menor relevancia fueron los paros cívicos (3,5%), la huelga de brazos caídos (1,9%) y el estado de emergencia (1,6%). Entre las manifestaciones de adhesión activa (que requieren una acción no habitual), las cuales representan el 44,7% de todos los eventos registrados, se destacan: la huelga de hambre (13,8%), marchas y manifestaciones (19,9%), tomas e intervenciones (6,1%), los bloqueos de vías en zonas urbanas (2,5%), y los bloqueos de vías en zonas rurales (2,4%).

La mayor parte de estos conflictos ocurrió en escenarios urbanos (66%) y no llegó a trascender más allá de su área de influencia local. Los conflictos rurales (también de ámbito local) suman el 14% del total. Pero también hubo conflictos cuyo ámbito de acción se extendió por todo un departamento (8,8%), en tanto que aquellos eventos que lograron convocar y trascender a la totalidad del país representan el 11,2% del total de conflictos registrados.

Ahora bien, y por último, ¿cuáles fueron los resultados de todas estas acciones? Veamos la respuesta en el siguiente gráfico.

Gráfico 5



Fuente: elaboración propia, base de datos de conflictos sociales del CERES.

Lo primero que se destaca es el escaso porcentaje de acciones conflictivas que consiguen todos (10,2%) o por lo menos parte (14,4%) de sus objetivos de lucha. Pero inmediatamente salta a la vista que el porcentaje de acciones que no tuvieron ningún éxito es aún menor (6,3%). La razón es, indudablemente,

el elevadísimo porcentaje de eventos (69,1%) de los cuales no se sabe a ciencia cierta qué desenlace tuvieron. Este hecho refleja una de las limitaciones de este trabajo y está relacionado con la fuente de la cual se extrajeron los datos sobre los conflictos: la prensa nacional. De manera acertada se dice que en periodismo toda noticia es noticia *del conflicto*; en consecuencia, los medios noticiosos viven de y se dedican casi exclusivamente a la difusión del conflicto (Mayorga Ugarte, 1999). De ello se deduce, y nuestros datos lo confirman, que la etapa de resolución o negociación de un conflicto no constituye una noticia desde la perspectiva de los medios de comunicación.

Contexto político nacional y conflicto social

A fin de que la labor de identificar qué cambios y qué persistencias se han producido en los conflictos sociales en Bolivia entre 1970 y 1998 no sea una labor inagotable, se ha dividido estos veintinueve años de historia en siete períodos diferentes. Con el propósito de identificarlos con mayor celeridad, en ocasiones se hará referencia a ellos de acuerdo al o a los gobernantes de turno. Sin embargo, es bueno aclarar desde un principio que con ello se pretende denotar un determinado momento histórico más que a las personas en sí mismas.

El siguiente cuadro nos señala la cantidad e intensidad de conflictos registrados en cada uno de los períodos o coyunturas históricas mencionadas.

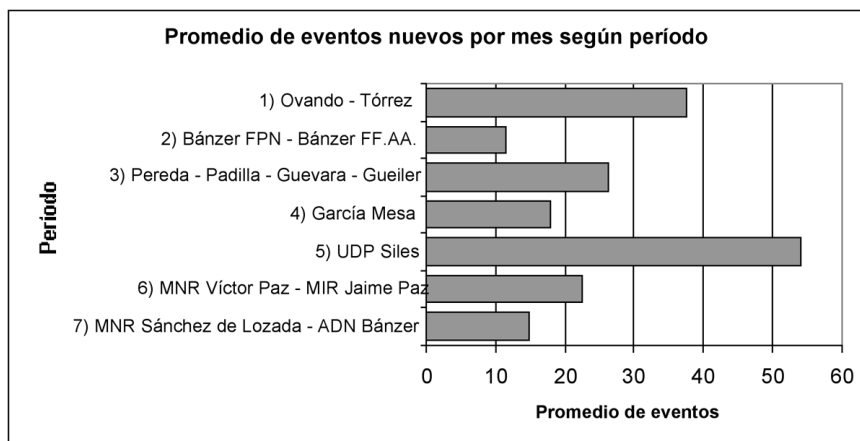
Cuadro 1

Número y Porcentaje de Eventos, Cantidad de Meses y Promedio de Eventos por Mes Según Período (1970 - julio 1998)

| Nº | Período | Eventos | % Eventos | Meses | Promedio x mes |
|--------------|---|---------|-----------|-------|----------------|
| 1 | 1-I-1970 a 20-VIII-1971 Ovando-Tórrez | 734 | 9,6 | 19,6 | 37,45 |
| 2 | 21-VIII-1971 a 21-VII-1978 Bánzer FPN-Bánzer FF.AA. | 952 | 12,4 | 83,1 | 11,46 |
| 3 | 22-VII-1978 a 17-VII-1980 Pereda-Padilla-Guevara-Gueiler | 626 | 8,2 | 23,8 | 26,30 |
| 4 | 18-VII-1980 a 10-X-1982 García Meza | 481 | 6,3 | 26,8 | 17,95 |
| 5 | 11-X-1982 a 4-VIII-1985 UDP Siles | 1.825 | 23,9 | 33,8 | 53,99 |
| 6 | 5-VIII-1985 a 6-VIII-1993 MNR Víctor Paz-MIR Jaime Paz | 2.148 | 28,1 | 96 | 22,38 |
| 7 | 7-VIII-1993 a 31-VII-1998 MNR Sánchez de Lozada-ADN Bánzer | 881 | 11,5 | 59,8 | 14,73 |
| TOTAL | | 7.647 | 100,0 | 342,9 | 22,30 |

Fuente: elaboración propia, base de datos de conflictos sociales del CERES.

Gráfico 6



Fuente: elaboración propia, base de datos de conflictos sociales del CERES.

Primer período: Ovando-Tórrez (1 de enero de 1970 a 20 de agosto de 1971)

Durante esta etapa se evidencian las primeras crisis del estado del '52. La presidencia de Ovando comienza a partir de un golpe militar el 26 de septiembre de 1969. Lo primero que se hace evidente en este período es que los obreros y otros sectores populares no estaban de acuerdo con la ruptura del gobierno constitucional de Siles Salinas. Esta disconformidad se expresa mediante numerosas acciones de protesta, las cuales alcanzan su máxima expresión en las guerrillas de Teoponte, lideradas por estudiantes que son muertos en su mayoría durante estas acciones, pero no sin antes haber captado la simpatía y el apoyo de grandes sectores de la población, sobre todo del movimiento obrero. En octubre de 1970 se produce un nuevo golpe de estado; sin embargo, la rápida y tenaz movilización de los sectores obreros y sindicales, e incluso militares, impide la consolidación del nuevo régimen apoyando al general Tórrez, quien logra encaramarse en la silla presidencial.

Está visto que este período se caracterizó por la gran agitación social y el enorme protagonismo de los sectores sindicales en el país. Los datos indican que durante esta coyuntura la intensidad de los conflictos fue una de las más altas por las que atravesó Bolivia. El Gráfico 6 y el Cuadro 1 en su última columna nos muestran que el promedio de conflictos nuevos por mes fue de 37,45: la segunda cifra más alta en el lapso de tiempo que dura el estudio.

Los principales actores de este período fueron los sectores medios (55,9%)⁴ y los obreros (17,2%). Sin embargo, se destaca por su intensidad el accionar de los estudiantes (25,9%), pertenecientes a los sectores medios, y los campesinos tradicionales⁵ (7,4%); en realidad nunca más estarán los campesinos tan intensamente activos como durante esta etapa. Consecuencia de ello, el área rural como ámbito de los conflictos experimenta uno de sus puntos de máxima intensidad (18,5% del total del período).

El principal móvil de la acción social conflictiva fue el económico (41,6%), pero las luchas en torno a temas político institucionales (19,2%) y las luchas sociales (16,3%) fueron las de mayor intensidad relativa.

Las acciones radicales primaron en el período, puesto que los conflictos más frecuentes, a la vez que intensos, eran las tomas o intervenciones de sedes, oficinas o instituciones (24,3%). Esto refleja el panorama de convulsión social y medidas extremas que se vivía en el país.

Segundo período: Bánzer FPN – Bánzer FF.AA. (21 de agosto de 1971 a 21 de julio de 1978)

Durante estos siete años el general Bánzer ocupa la silla presidencial; primero a través de un golpe de estado civil-militar y a través del Frente Popular Nacionalista (FPN) conformado por la Falange Socialista Boliviana (FSB) y el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). Sin embargo, en noviembre de 1974, se “deshace” de éstas y de otras organizaciones políticas y procede a concentrar el poder en manos de las FF.AA. (Laserna, 1986: 55).

Si bien durante la primera parte del gobierno de Bánzer se pretendió dar continuidad al modelo económico precedente basado en el modelo cepalano desarrollista y de sustitución de importaciones, y cuyos principales bastiones en Bolivia eran la minería y la agroindustria, el fracaso del mismo da paso, durante la segunda fase, a una nueva visión de desarrollo. Es ahora turno de una política estatal inspirada en la doctrina de seguridad nacional, por una parte, y del desarrollismo tecnocrático, por la otra.

La totalidad de estos cambios, desde 1971, expresa la tendencia a un desplazamiento de las estructuras hegemónicas políticas, económicas y regionales. De manera general, el aparato del estado se coloca al servicio del enriquecimiento acelerado de los sectores directamente vinculados con el aparato político, y en alguna forma también a los sectores tradicionales de la burguesía (Grebe López, 1987: 103-116).

Durante toda esta etapa y hasta 1977 aproximadamente, se produce un auge y expansión de la economía nacional, debido sobre todo a la elevada cotización de los productos tradicionales de exportación, a cierta modalidad de privatización de las empresas nacionales que a su vez sirven de conductos a través de los cuales canalizar el capital extranjero, y a la congelación de salarios. Sin embargo, este importante flujo de capitales no fue utilizado para gastos de inversión, sino para gastos de consumo suntuario de las cúpulas políticas. Acompañó a este proceso de bonanza un creciente afloramiento inflacionario, lo que a su vez repercutió en una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores.

Hay que recalcar que otra de las características de estos dos períodos, estrechamente ligada a la doctrina de seguridad nacional, fue la fuerte represión del movimiento sindical o de cualquier otro tipo de expresión que cuestionara la pertinencia o legalidad del régimen. Sin embargo, para 1977, la recesión

mundial cíclica y las contradicciones del modelo de acumulación vigente ocasionan un derrumbe económico en el país. Este factor aumenta el proceso inflacionario ya en curso. Todo ello repercute en el debilitamiento del poder hegemónico de corte banzerista. Así, paulatinamente, se dan las condiciones que permiten el renacer político y activista de los movimientos sindicales y populares hasta entonces reprimidos y debilitados.

Vemos entonces que, de acuerdo al Cuadro 1, el promedio de conflictos nuevos por mes durante este período es el más bajo entre todos los estudiados (11,46 eventos nuevos por mes). Si vemos nuevamente el Gráfico 1, podremos observar que en algunos meses el número de conflictos era cero, y en muchos otros las cifras eran cercanas al cero. Esto no significa que no hubiera conflictos latentes e incluso manifiestos. Ocurre que nuestro objeto 'conflicto' ha sido construido a partir de datos recogidos por la prensa. Por ende, esta drástica caída en el nivel de conflictividad general no responde exclusivamente a la represión que en este período existía sobre los movimientos sindicales y populares, sino también, y en gran medida, a la falta de libertades civiles (de expresión, de prensa, etc.) y a la severa censura que se ejercía sobre los medios.

Los datos también nos hablan de que a finales de este período comienza a producirse una creciente participación, y con una intensidad mayor que en la etapa precedente, de los sectores obreros (20,7%) y de los sectores medios (59,6%). Entre estos últimos se destacan los maestros urbanos (6,7%), los empleados bancarios (5,4%) y los estudiantes (27,9%). Las luchas por temáticas político-institucionales –libertades democráticas, defensa de los derechos humanos y respeto por las leyes– alcanzaron, durante esta etapa, su mayor intensidad relativa respecto a cualquier otra ocasión. Es curioso también que durante este período no se presenta ningún conflicto que tenga por objetivo solicitar del estado apoyo para una determinada empresa o institución.

Seguramente la falta de garantías a los derechos humanos y civiles también ocasionó que la forma de los conflictos fuera más cauta y conservadora. Así, las acciones de adhesión pasiva predominan claramente (69,8%) debido al riesgo de tipo personal que supone emprender acciones que requieran una adhesión activa (28,4%) en condiciones sociales semejantes.

Paradójicamente, no son acciones de protesta suaves las que terminaron por derrumbar el régimen banzerista, sino todo lo contrario: una masiva huelga de hambre iniciada a finales de 1977 y que contó con el apoyo de los sectores más importantes y diversos en todo el país. Como resultado de estas movilizaciones, se convocó a elecciones en el año 1978.

Tercer período: Pereda-Padilla-Guevara-Gueiler (22 de julio de 1978 a 17 de julio de 1980)

Esta etapa, si bien es breve en lo que hace al tiempo, es por otro lado de una marcada inestabilidad a todo nivel. Como ejemplo de lo anteriormente dicho, baste enumerar las principales situaciones políticas que el país vivió: elecciones fraudulentas, tres llamamientos a elecciones, cuatro golpes de esta-

do, el nombramiento de dos presidentes interinos y la realización de nuevos comicios electorales, que de todas formas terminó en nada debido a uno de los golpes de estado mencionados.

Como es fácil percibir, la escena política y social corresponde a una etapa de transición a la democracia, donde las expectativas electorales son una de las principales preocupaciones de los diferentes actores sociales. De esta manera, gran parte de los esfuerzos de los sectores obreros, populares y ciudadanos en general, se concentra en establecer un estado de derecho y defenderlo de la amenaza de nuevos intentos golpistas. La crisis económica e inflacionaria es otro factor que contribuyó a azuzar las movilizaciones y protestas de la población en este período.

La base de datos de conflictos indica que, en comparación con la anterior etapa, existe un aumento del promedio de conflictos nuevos por mes (26,3%). Esto responde a la gran inestabilidad social ya señalada, y también al debilitamiento de las estructuras de poder estatales, lo que contribuyó al resurgimiento de las actividades sindicales y las acciones de grupos populares.

Los protagonistas más frecuentes de eventos conflictivos durante esta etapa siguen siendo los sectores medios (57,8%) aunque con una ligera baja de intensidad en relación al anterior período. En cambio, tienen una mayor intensidad las acciones llevadas adelante por los obreros y los sectores populares urbanos. La grave crisis económica ocasiona que los conflictos relacionados con esta temática cobren más importancia que en los períodos anteriores. De todas formas, y aún a pesar de la crisis, una de las demandas más importantes tenía que ver con las así llamadas “luchas sociales” (9,3%), es decir, el deseo y la voluntad de los diferentes actores sociales para participar en los ámbitos decisionales y gerenciales de las diferentes instituciones, empresas o reparticiones del estado. Este último aspecto marca una clara diferencia entre este período y todos los demás. La evidencia nos indica que si bien el problema económico es uno de los más apremiantes, sobre todo para las clases populares, las demandas no se concentran tanto en exigir que el estado solucione la crisis y mejore la economía, sino que denota el deseo de la sociedad civil de ser coprotagonista de su propio desarrollo y crecimiento, es decir, quiere gobernar el país. Esta hipótesis probablemente se ve confirmada con el arribo de la UDP al poder, puesto que su plataforma política de co-gobierno obrero fue, muy posiblemente, un factor de mayor importancia para las masas que el programa económico de este partido (Grebe López, 1987).

La adhesión pasiva como forma de acción sigue siendo la más importante durante esta fase, e incluso se nota un aumento en la intensidad y radicalidad con que ésta se lleva adelante. Destacan, por ejemplo, la huelga por tiempo indefinido (32,6%) y los paros cívicos (4,2%). También existe un ligero aumento en la intensidad de los conflictos de adhesión activa, sobre todo en los bloqueos de vías urbanas (2,7%) y rurales (3%). Por otra parte, las acciones conflictivas acaecidas en el ámbito rural (13,9%) tienden a disminuir notablemente, en tanto que aquellas que tuvieron un poder de convocatoria y adhesión nacional (10,2%) experimentaron un notable incremento.

Cuarto período: García Meza (18 de julio de 1980 a 10 de octubre de 1982)

Como se ha visto, durante el período precedente, y para ser más exactos desde 1977, se había estado observando el renacimiento de los movimientos sindicales y populares. El orden militar autoritario, cada vez más debilitado, ante el 'temor' a la toma del poder por parte de los radicales de izquierda, intenta desesperadamente recuperar el control del país por medio de un golpe militar en julio de 1980. El general García Mesa, a la cabeza del nuevo régimen, cerró por completo el parlamento; se prohibieron los partidos políticos, los sindicatos y cualquier forma de organización o accionar con fines políticos; y también se asesinó a numerosos líderes políticos, obreros y militares.

A pesar de que esta dictadura fue una de las más violentas y represivas de cuantas haya vivido el país, casi de inmediato la protesta popular actuó desde todos los resquicios que el poder le permitía a fin de derrocar el régimen e instaurar un estado de derecho. La insostenible presión popular e incluso internacional propició levantamientos militares y una sucesión de juntas de gobierno y gobiernos de facto, ninguno de los cuales pudo, empero, resolver los graves problemas por los que atravesaba Bolivia en ese entonces. Finalmente, en 1982, el general Guido Vildoso, en nombre de la Fuerzas Armadas, terminó reconociendo la validez y legitimidad de las elecciones de 1980 y entregando el gobierno a la coalición vencedora de entonces.

La crisis económica resulta ser la clave para entender la aparente paradoja de que precisamente haya sido durante uno de los períodos más represivos y sanguinarios que el movimiento obrero y popular pudo no sólo sobrevivir, sino también fortalecerse e incluso restaurar la democracia. Esto queda claro si recordamos que uno de los fundamentos más importantes a partir del cual los militares justificaban su acceso al poder era precisamente solucionar los graves problemas por los que atravesaba la economía nacional. Al no lograr resolver estas cuestiones, empeorándolas incluso, quedaba completamente invalidada semejante justificación, al mismo tiempo que se legitimaba el derecho de la sociedad a reclamar, y por lo tanto organizarse, en torno a estos problemas no resueltos (Calderón y Laserna, 1983: 22).

Los datos reflejan el carácter represivo de este momento histórico, puesto que el promedio de eventos nuevos por mes (17,95) sufre un notorio descenso, pero jamás alcanza cifras tan bajas como las registradas durante el segundo período (los dos primeros de Bánzer). Esto nos remite al creciente resurgimiento de los movimientos sociales que hemos mencionado. Esto se refuerza al saber que los sectores obreros (29,1%), sobre todo los fabriles, fueron quienes con mayor intensidad participaron de las luchas de este período. En contraste, los sectores medios (52%), aunque como siempre fueron los más numerosos, disminuyeron marcadamente la intensidad de su protagonismo en los conflictos.

La economía es la mayor preocupación de las personas durante esta coyuntura (61,3%) y, además, con una intensidad mayor respecto de lo registrado en cualquier otro momento dentro el estudio. También importantes fueron las demandas de tipo político coyuntural (rechazo al gobierno y sus medidas), con el 11,9%, y las de tipo político institucional (libertades civiles, derechos humanos,

etc.), con un 13,1% del total de los eventos registrados. Siguiendo la tendencia registrada durante el anterior período, los conflictos de ámbito nacional (12,3%) experimentan un incremento en su frecuencia, en tanto que aquellos circunscritos al ámbito rural (11,6%) nuevamente sufren una ligera caída.

Quinto período: UDP - Hernán Siles Suazo (11 de octubre de 1982 a 4 de agosto de 1985)

Este período inicia la fase de recuperación y consolidación de la democracia en Bolivia. Se recordará que el gobierno de Siles comienza con la derrota de la dictadura militar y el reconocimiento de los resultados de las elecciones de 1979. Esta recién inaugurada democracia debe, no obstante, enfrentarse a duras pruebas antes de consolidarse definitivamente. En general, este gobierno se caracterizó por una gran debilidad institucional y política, tanto así que vio reducida su permanencia en el poder a menos de tres años de los cuatro establecidos constitucionalmente a raíz de la renuncia de Siles.

La crisis económica iniciada en 1977 alcanzó en 1981 uno de sus peores momentos. Esto significó un duro golpe a la credibilidad del gobierno de la UDP y el debilitamiento del mismo, puesto que un componente sustancial de la oferta electoral de este partido había sido el dar una rápida solución a esta crisis. Debe recordarse además que para los principales líderes e intelectuales de la UDP, el desajuste económico se debía principalmente a los malos manejos de las dictaduras, y no a causas estructurales y fallas del modelo económico vigente desde 1952. Sin embargo, los males no eran tan simples. Más allá de los malos manejos económicos de los militares, la crisis también tenía sus vertientes en la recesión mundial de ese entonces, la caída en las cotizaciones de los minerales y otros productos de exportación bolivianos tradicionales, y el pago de la enorme deuda externa adquirida en los años de bonanza económica. A esto se deben sumar los severos desastres naturales que azotaron el país en 1983, todo lo cual contrajo aún más el poder adquisitivo de las masas, deterioró las condiciones generales de vida y disparó lo que se llama la 'hiperinflación' de la moneda.

En suma, el gobierno no había podido cumplir con las elevadas expectativas que la sociedad había puesto en él –en realidad la misma UDP había contribuido a generarlas. Por otro lado, existía en los sectores sindicales y populares una franca voluntad de participar del acto mismo de gobernar –de hecho había en la primera etapa un co-gobierno obrero–, pero la imposibilidad de solucionar la crisis y la diversidad de orientaciones políticas y programáticas de unos y otros condujo a una virtual ingobernabilidad del país, con la consecuente escalada de los conflictos sociales a un nivel nunca visto (cincuenta y cuatro eventos nuevos por mes en promedio) ni superado.

Afortunadamente, y a pesar del estado de convulsión social que se vivía, no se produjo ningún otro intento de golpe de estado, ya que el compromiso de casi todos los sectores de la sociedad estaba con la apuesta por la democracia y el establecimiento de un estado de derecho sólido y duradero. Esta con-

ciencia democrática derivó en la renuncia del presidente Siles y la convocatoria a elecciones en el año 1985.

Un hecho curioso se produce al comparar en detalle la participación en los conflictos de los diversos actores con anteriores períodos, sobre todo los dictatoriales. Tal parece que aquellos sectores que otrora eran los principales protagonistas de las acciones conflictivas ceden su lugar a otros hasta este momento poco visibles. Entre los primeros tenemos por ejemplo a los mineros (5,4%), maestros urbanos (5,8%), estudiantes (6%) y fabriles (5,9%), en tanto que entre los segundos se puede hallar a los empleados públicos (28,1%), militantes políticos (1,6%) y vecinos (4,8%). También los campesinos tradicionales (3,3%) e incluso los del trópico (1,3%) aumentan su grado de participación en los eventos registrados durante este período. Quizá este fenómeno pueda deberse a que con el arribo de la democracia se produjo una suerte de recomposición del grado de visibilidad de los diferentes actores sociales del país. El aumento de libertades probablemente permitió que actores antes poco visibles, y por lo general poco organizados, tuvieran entonces la oportunidad de fortalecer su presencia en la escena social por medio de acciones reivindicativas y de protesta (Laserna, 1986: 67). Tampoco se debe olvidar que los obreros, por medio de la Central Obrera Boliviana (COB), tuvieron una cierta participación en este gobierno, por lo que no resulta extraño que por lo menos algunas facciones entre ellos se abstuvieran de protestar, ya que formaban parte del “problema”.

En general la economía fue el tema más frecuente de los conflictos durante esta coyuntura (56,3%), y los sectores medios quienes lucharon con más intensidad por esta causa. Otros sectores de la sociedad estuvieron más bien preocupados por el quehacer político y administrativo de este flamante pero tambaleante gobierno democrático. Los obreros, por ejemplo, centraron su interés en el ámbito de la política coyuntural e institucional. Los sectores populares urbanos también se enfocan en lo político coyuntural, y lo mismo les pasa a los campesinos tradicionales, quienes además muestran un claro interés en el ámbito de las luchas sociales.

Las acciones conflictivas que implican la adhesión activa de los involucrados, si bien no son la mayoría (39,4%), aumentan visiblemente respecto a períodos anteriores, sobre todo los bloqueos de vías urbanas (3,9%) y rurales (3,7%), las marchas y manifestaciones (13,3%) y las tomas e intervenciones (7,4%). En lo que se refiere a los escenarios en que se desenvuelven los conflictos, estos no presentan cambios relevantes respecto al anterior período en lo que hace a su distribución.

Sexto período: MNR Víctor Paz – MIR Jaime Paz (5 de agosto de 1985 a 6 de agosto de 1993)

A este proceso podríamos llamarlo de “consolidación de la democracia”, aunque también puede caracterizarse por la ruptura con el estado benefactor del '52 y el inicio del estado neoliberal. Este período se caracteriza porque en él se logra estabilizar la economía a través de una serie de medidas de ajuste estructural que

tenían por objetivos principales achicar el estado, racionalizar su funcionamiento, e implementar una economía de mercado libre. Paralelamente, y en el campo social, se operaron algunos hechos importantes. El proceso de ajuste implicó el despido masivo de empleados del estado, congelamiento de salarios, reducción del gasto e inversión públicos, alzas impositivas y en el precio de los carburantes.

El impacto negativo que estas medidas tuvieron en la economía popular fue motivo de airadas protestas desde el primer momento, a veces inclusive antes de promulgadas y en base a rumores. Sin embargo, los actores sociales tradicionales de la sociedad civil (sindicatos obreros y campesinos) se hallaban muy debilitados, tanto a consecuencia de los fracasos que habían tenido en el anterior período como por la evidente reducción de miembros con que contaban a raíz de los despidos, sobre todo los mineros, otrora “vanguardia” del movimiento obrero boliviano. Esto facilitó que el estado no dudara en reprimir todas las acciones que estuvieran en contra de las políticas de ajuste (Calderón y Szmukler, 2000: 266).

La práctica política mantuvo la mayor parte de los rasgos que tenía ya desde la formación del estado del '52: el clientelismo burocrático y una lógica prebendalista de acceso al poder y los recursos del estado.

Lo primero que se nota en los datos pertenecientes a este período es que la intensidad de los conflictos bajó considerablemente (22,28 eventos nuevos por mes en promedio) respecto al caso anterior. Como se explicó, esto puede deberse a dos causas: la primera es la conjunción entre el debilitamiento de los sectores sindicales y la represión por parte del gobierno, y la segunda, la estabilización de la economía del país. Este último factor puede ser corroborado en el hecho de que los conflictos motivados por razones económicas (44,9%) sufrieron una considerable baja respecto a anteriores períodos. Por el contrario, el así llamado estatismo, que es el pedido que se le hace al estado para que apoye o beneficie a determinada empresa, institución o sector, cobra una inusitada intensidad (10,6%), en verdad la más alta registrada durante los veintinueve años de este estudio. Este hecho puede indicar dos cosas completamente diferentes: a) la sociedad sentía una gran confianza en el gobierno, fruto ello de la estabilidad económica, y por tanto requería de su ayuda y apoyo, o b) esto representaba un intento desesperado e infructuoso por recuperar la tradición y lógica del antiguo y desaparecido estado centralista y benefactor, el que debía resolver los problemas de todos sus 'hijos' mientras estos esperaban sentados o caso contrario gritaban más fuerte. Probablemente el segundo punto tenga mayor relación con lo sucedido que el primero. Los conflictos de orden político coyuntural (18,7%) también descollaron, sin duda en respuesta a la aplicación de las diferentes medidas de ajuste estructural.

Los sectores medios de la sociedad registran una ligera baja en la frecuencia con que realizan acciones conflictivas (51,7%), aunque sin perder por ello su primer sitio. Los que sobresalen por su intensidad relativa, sin embargo, son otros: es el caso del sector 'ciudadanía en general' (8,2%), de los campesinos del trópico (2,1%) y de los sectores excluidos (despedidos, desempleados, rentistas, jubilados), con el 5,4%. Estos datos nos insinúan algunas cosas sobre el panorama

ma social reinante en este período. Primero, que la disminución en la intensidad de los conflictos realizados por los sectores medios –la mayor parte de ellos sindicalizados– y el aumento en los del sector denominado ‘ciudadanía en general’, nos hablan del real debilitamiento y pérdida de importancia de los sindicatos como entes válidos de intermediación de las demandas de la población civil ante el estado. Segundo, existe un creciente número de personas que no ha podido reincorporarse al mercado laboral luego de haber sido despedidos, en gran parte, durante la aplicación de las políticas de ajuste. Estas personas tampoco cuentan ya con una organización que las agrupe y canalice sus demandas. Es lógico suponer que todos estos grupos, que por lo general no cuentan con un nivel organizativo estable, o directamente no cuentan con ninguno, opten por formas de manifestar los conflictos que no requieran de tales instancias. Este supuesto se ve confirmado en los hechos, ya que en este período se puede observar una gran escalada en la intensidad de uso de las marchas y manifestaciones (28,1%), las huelgas por tiempo definido (23,3%) y las huelgas de hambre (16,1%), acciones todas ellas que no precisan que los sujetos que las llevan a cabo cuenten con niveles organizativos sofisticados. Por otro lado, también se constata que este período detenta el mayor número de huelgas de hambre registradas en el lapso del tiempo de estudio. La huelga de hambre es una de las medidas más desesperada a las que pueden recurrir las personas. También denota muchas veces una cierta debilidad de relacionamiento institucional, pues es a la opinión pública, y arriesgando la salud, que estos actores interpelan a fin de doblegar al contrario, por lo general el estado. No es casual que este tipo de medida se haya incrementado al mismo tiempo que el número de personas sin empleo. Los campesinos del trópico, por su parte, se hacen más visibles debido fundamentalmente a las políticas gubernamentales de reducción de las plantaciones de hojas de coca como parte de la política de lucha contra las drogas.

También como consecuencia de la reducción de cocales, los conflictos en el área rural (13,6%) aumentan nuevamente. A esto debemos añadir que la organización sindical de los campesinos del trópico cobra paulatinamente una mayor importancia como ente aglutinador de sus demandas. Por otro lado, también existe una tendencia a que los conflictos interpelen a sectores cada vez más amplios y menos localistas. Así, los conflictos con ámbito departamental se incrementan hasta alcanzar el 15,4% del total de los eventos registrados, y en forma parecida también aumentan los conflictos de alcance nacional (15,5%). Una causa probable para ello se halla en que la aplicación de las políticas de ajuste estructural interpeló, como pocas veces, al conjunto de la población, las cuales unificaron sus fuerzas a fin de combatirlas con mayor eficacia.

Séptimo período: MNR Sánchez de Lozada – ADN Bánzer (7 de agosto de 1993 a 31 de julio de 1998)

Este último período estudiado se caracteriza por las importantes reformas políticas y económicas que fueron implementadas. Se destacan las siguientes:

- a) La capitalización, es decir, la transformación de las empresas del estado en empresas mixtas mediante la captación de inversionistas nuevos por

un monto cercano al capital total de la empresa, de modo que resultaran socios, no por adquisición, sino por aporte de capital.

b) La reforma educativa, cuyo objetivo era renovar los contenidos y métodos educativos a fin de elevar y modernizar la calidad de la educación. También se reconoció el derecho a la interculturalidad por medio de una educación bilingüe. Igualmente se hizo el intento de disminuir el poder del gremio docente mediante la libre sindicalización y generando mecanismos de control comunitario sobre la educación (Calderón y Szmukler, 2000: 270).

c) Participación popular, que por un lado opera cambios en el ámbito municipal, ampliando su jurisdicción a toda su base territorial y transformando su organización interna con la creación de la figura del Comité de Vigilancia, ello acompañado con la transferencia de nuevas responsabilidades (salud y educación, por ejemplo) y recursos (de acuerdo al número de habitantes). Por otro lado, por primera vez en la historia boliviana se reconoce y se otorga legalidad a actores sociales antes ignorados por completo, permitiéndoseles incluirse en el accionar del estado, sobre todo en las decisiones estatales a nivel local (prefecturas y alcaldías, entre otras).

La aplicación de estas y otras medidas produjo la reacción inmediata de los sectores que se sentían afectados, por lo cual algunas de ellas –la Reforma Educativa es el más claro ejemplo– se vieron seriamente imposibilitadas de ejecutarse por algún tiempo. De cualquier forma, la intensidad de los conflictos es aún menor en este período (14,73%) que en el precedente. Todo parece indicar que el debilitamiento de los sectores sindicales tradicionales, especialmente de la COB, se hace cada vez más agudo, con lo cual también disminuye la cantidad de acciones sociales conflictivas, de las cuales la COB era el principal portavoz y organizador.

En términos generales las principales características de las acciones sociales conflictivas tienen gran semejanza con las explicadas en el anterior período. Así, por ejemplo, se observa una nueva caída en la participación de los sectores medios, que esta vez sólo protagonizan el 37% del total de eventos. En cambio persiste la tendencia al aumento de intensidad en la participación de los campesinos del trópico (5,9%), la ciudadanía en general (10,6%), e incluso nuevos y no clasificados actores sociales a los cuales llamaremos ‘otros’ (12,6%).

Las luchas de orden económico alcanzan su nivel más bajo (28,8%), y por primera vez no son las más frecuentes, cediendo su lugar a los conflictos en torno al ámbito político coyuntural (35,3%). Los temas político-institucionales (10,7%) y de estatismo (9,2%) también ocupan posiciones importantes en la dinámica de los conflictos a lo largo de esta coyuntura política. En forma análoga al anterior período, se produce un aumento en la intensidad de las huelgas de hambre (22%) y de las marchas y manifestaciones (36,9%). En contraste, decaen súbitamente las huelgas laborales, tanto de tiempo definido (18,6%) como indefinido (6,1%), que hasta hace poco eran parte de las estrategias de lucha más importantes y frecuentemente utilizadas durante los conflictos. En lo referente al lugar en el que se desarrollan los conflictos, se observa una tendencia al aumento de aquellos de índole urbano/localista (60,7%).

Como quedó claro en las explicaciones correspondientes al anterior período, las tendencias que aquí se observan se deben en gran medida a factores como: la estabilidad de la economía durante esta coyuntura política, el debilitamiento y pérdida de legitimidad de los sindicatos tradicionales (COB) como mediadores entre la sociedad civil y el estado, la dispersión y atomización del movimiento social y laboral, el progresivo endurecimiento de la política de lucha contra el narcotráfico y la reducción de los cicales y, finalmente, la aparición de nuevos actores sociales como consecuencia de la ausencia de mecanismos que permitan el tratamiento y negociación de los problemas y reclamos de la población, y a consecuencia también del fracaso de los ya existentes.

Cambios y persistencias en los conflictos sociales (1970-1998)

Después de haber visto las características de los conflictos sociales en los diferentes períodos de estudio podemos aventurarnos ahora a hacer algunas precisiones sobre las tendencias de los mismos a lo largo de los veintinueve años que comprende este estudio. Como marco de referencia se han establecido dos grandes épocas o lapsos de tiempo: el primero empieza en 1970 y se extiende hasta el final del cuarto período en octubre de 1982; el segundo comprende todo lo demás. Esto obedece a que las diferentes coyunturas históricas que recaen en cada una de estas dos épocas tienen ciertos rasgos comunes que permiten agruparlas de tal modo.

La primera época corresponde a unos años de extraordinaria inestabilidad política y social, y la caracterizan los continuos cambios de gobierno a raíz de los golpes de estado militares. La forma de estado es la del '52, es decir, benefactor/centralista/corporativo. Si bien parte de la década del '70 fue de un extraordinario auge económico, la crisis que empieza a manifestarse en 1977 culmina en 1985 como un verdadero desastre capaz de poner el país al borde del colapso. El hecho de que prevalezcan los gobiernos militares tiene como consecuencia, la mayor parte de las veces y con mayor gravedad en unas ocasiones que en otras, la supresión y violación de los derechos civiles y humanos de las personas y la represión de toda acción opuesta al régimen, sobre todo los sindicatos y otras organizaciones populares.

Durante esta época, y especialmente durante los períodos dictatoriales más duros, la cantidad e intensidad de las acciones sociales conflictivas no es muy alta. Los riesgos que ellas implican obligan a la sociedad a mostrar un perfil bajo, o por lo menos a actuar en una forma menos visible que en el caso de los conflictos sociales tradicionales. No hay que olvidar que el bajo número de conflictos también se debe a que la prensa probablemente dejó de registrarlos debido a la fuerte censura imperante. Durante esta época los conflictos de adhesión pasiva (huelga laboral por tiempo definido e indefinido y de brazos caídos, paros cívicos y estados de emergencia) fueron los más frecuentes. Se supone que ésta era una forma de minimizar el riesgo de sufrir los efectos de la represión por parte del gobierno.

Los actores sociales más importantes fueron los obreros, sobre todo fabriles, y los campesinos tradicionales, ello en virtud de la larga experiencia sin-

dical de ambos y el carácter político que además orientaba su praxis. Los sectores medios también se consolidaron en esta época como uno de los más importantes del país, especialmente los asalariados del gobierno, los maestros urbanos y los estudiantes. Hay que apuntar que los campesinos tradicionales demostraron una gran actividad sólo durante los primeros años de esta época, y luego se fueron retrayendo cada vez más hasta resurgir, pero sólo en parte, durante los primeros años de la vuelta a la democracia.

Los conflictos en torno a la temática económica son los más frecuentes, pero la mayor intensidad relativa se da en la arena de los conflictos políticos. La toma del poder (estatal), el restablecimiento de la democracia, el deseo de participar activamente en la toma de decisiones y políticas estatales, son los temas que más apasionan a los grupos sociales en conflicto.

A consecuencia de la retirada de los campesinos del panorama de los conflictos, el lugar en que estos se desarrollan se ve modificado en parte. Así, los conflictos acontecidos en el área rural sufren una lenta disminución a lo largo de toda esta época. También pasa esto con aquellos que ocurrieron en ámbitos urbano-locales pero en mucho menor escala. Lo que ocurre es que los conflictos que interpelaron a la totalidad del escenario nacional aumentan significativamente de frecuencia. Ello es un indicador de que muchos problemas llegaron a ser comunes a diferentes personas en todo el país, y que además se fueron construyendo las condiciones necesarias para unificar el accionar de todas ellas.

La segunda época corresponde a la vuelta y consolidación de la democracia en Bolivia. Durante los primeros tres años, gobierno de la UDP, se vive el momento de mayor conflictividad social en el país debido a la terrible crisis económica y a las contradicciones y pugnas entre los diferentes socios de la coalición gobernante. El panorama era de una absoluta ingobernabilidad. Pronto vendría el cambio de gobierno y con él también el cambio del tipo de estado a uno de corte neoliberal. A partir de este momento se logra estabilizar los principales indicadores macroeconómicos; sin embargo, no se logra la tan esperada reactivación ni la mejora de las condiciones de vida de la mayor parte de la población. No mucho tiempo después vendrían importantes transformaciones políticas y económicas durante el gobierno de Sánchez de Lozada (capitalización, reforma educativa y participación popular), las cuales suscitaron numerosas y airadas protestas. Desafortunadamente, tampoco estas medidas logran mejorar las condiciones económicas de las personas y del país en general. A lo largo de esta época habrán de aumentar paulatinamente el desempleo y el subempleo así como otras estrategias de sobrevivencia, especialmente el comercio a pequeña escala o ambulante.

En democracia los conflictos parecen ser más frecuentes que en dictadura, y es que las cosas se hacen más simples, por lo menos aparentemente. La Constitución garantiza el derecho de los individuos al disenso, a la huelga y a asumir acciones de protesta públicas. Estas prerrogativas son ampliamente ejercidas, y de manera tal que muchas veces traspasan el elástico límite que señala si efectivamente están ejerciendo sus derechos o están pisoteando el derecho de los demás. La ciudad de La Paz es un buen ejemplo de esta ambigüe-

dad; dada su condición de Sede de Gobierno, casi a diario el centro de esta ciudad se ve paralizado durante varias horas debido a las continuas marchas, bloqueos y manifestaciones que sectores sociales provenientes de todo el país realizan en su afán de 'hacerse escuchar por el gobierno'. Los perjuicios económicos y sociales que representa esta interrupción de las actividades cotidianas son enormes. En otras partes del país también se da este fenómeno, pero con mucha menor frecuencia y siempre de acuerdo al grado de importancia política y estratégica de cada lugar.

Con respecto a la anterior época se dan algunos cambios en la composición de los protagonistas de los conflictos sociales. Los obreros y los sectores medios siguen siendo importantes y frecuentes líderes de la acción social conflictiva. Sin embargo, pierden un tanto su brillo frente al surgimiento de otros actores y grupos sociales; muchos de ellos ya estaban allí, pero necesitaban que la democracia les brindara la oportunidad de salir a la luz pública o de aumentar su protagonismo. Este es el caso del sector denominado 'ciudadanía en general'. Fruto del desempleo y los despidos masivos, también los grupos o sectores excluidos (desempleados, rentistas, jubilados) se hacen cada vez más visibles. Por otro lado también aumenta significativamente el número de eventos protagonizados por actores imposibles de reducir a cualquiera de los grupos presentes en la clasificación con que se ha trabajado, es decir, grupos genuinamente nuevos. Muchos de estos actores recién mencionados surgen a raíz de las transformaciones que la participación popular opera en cuanto al reconocimiento de personería jurídica a organizaciones territoriales de base en todo el país; frecuentemente estas organizaciones, ahora legalmente constituidas y dotadas de legitimidad, se formaron en base a organizaciones tradicionales preexistentes y de profundo arraigo en la cultura de sus sociedades. La debilidad y descrédito de los mecanismos y organizaciones por los cuales tradicionalmente la población expresaba y elevaba sus quejas y demandas al estado (sindicatos, comités cívicos y las centrales obreras y juntas vecinales, entre los más importantes) también contribuyen a la aparición de nuevos actores sociales y nuevas formas de organización para la acción. Un caso especial lo constituyen los campesinos del trópico, pues el aumento del protagonismo de estos en los conflictos sociales se halla vinculado a la mayor dureza en la aplicación de los programas de lucha contra el narcotráfico y reducción de los cultivos de hojas de coca. Sin duda, su fuerte dirección sindical (su máximo representante es también diputado nacional en el último gobierno) no hace sino incitar a una mayor participación de estos campesinos en la vida política del país. En realidad ya se evidencia una cierta lucha de poderes o pulseada entre la Federación de Campesinos del Trópico y la Central Obrera Boliviana.

Asombrosamente, durante esta época las reivindicaciones de índole económica se hacen cada vez más escasas y menos intensas. Una de las causas probables de este hecho puede ser la estabilidad de la economía nacional, sobre todo desde 1985. A diferencia de la época anterior, las luchas político-institucionales pierden intensidad y se hacen menos frecuentes. Ahora el objetivo que persiguen se hace cada vez más fuerte en el ámbito político coyuntural (cambiar disposiciones legales y mostrar apoyo o rechazo al gobierno o sus

medidas), y en el llamado 'estatismo' (solicitar al gobierno apoyo o favores para una institución, organización o gremio). Este cambio es bastante congruente con la nueva realidad socioeconómica boliviana. El interés de los actores sociales no es ya tanto salir a luchar en las calles y paralizar la actividad productiva a fin de tomar por asalto el poder, sino más bien exigir que las leyes y acuerdos establecidos funcionen de manera correcta y puntual. También existe una cierta reticencia a dejar de ver al estado como el gran padre benefactor que todo lo resuelve si el llanto (o el berrinche) es lo suficientemente intenso; y por eso la temática estatista es más frecuente en los conflictos: porque no se quiere asumir las nuevas reglas de juego del estado neoliberal.

En esta época los conflictos de adhesión pasiva siguen siendo mayoritarios, pero las mayores libertades de expresión y acción aumentan también la proporción de conflictos de adhesión activa (huelga de hambre, bloqueos de vías, tomas e intervenciones y marchas y manifestaciones). Recién hemos hablado de la aparición de nuevos actores sociales y del aumento de la visibilidad de otros, como los sectores excluidos, por ejemplo. La mayor parte de estos actores no cuenta con organizaciones complejas y duraderas. La desesperación de los segundos y la falta de mecanismos institucionales que canalicen las demandas de ambos también son causas probables del creciente aumento de las huelgas de hambre como método de lucha en el país.

De todo lo expuesto podemos sacar algunas conclusiones generales. Una de ellas sería que no es posible relacionar de forma directa a un determinado actor social con cierta coyuntura política del país. La forma en que han evolucionado los diferentes actores sociales, los objetivos de sus luchas, la estrategia empleada para conseguir sus objetivos y demás componentes son función de múltiples factores o variables: la coyuntura política, la salud de la economía –tanto nacional como la que se percibe directamente en los bolsillos de la gente, el grado de evolución y madurez de los actores sociales e incluso de la herencia cultural y la tradición política y de ejercicio del poder de la sociedad, así como sus asimetrías heredadas del pasado.

Una segunda conclusión afirma que la tradición de lucha política y de relacionamiento de la sociedad con el estado heredada del estado del '52 se halla aún muy arraigada en las prácticas y actitudes de la sociedad boliviana, determinando en gran medida la forma en que se desarrollan los conflictos. El hecho de que el estado siga siendo visto como el principal adversario en los conflictos es un buen indicador de esto.

De ser cierto lo anterior, entonces también es verdad que el advenimiento del estado neoliberal a partir de 1985 es un momento "bisagra", a partir del cual se han producido los mayores cambios en las principales características de los conflictos nacionales durante todo el período de estudio. Y ello porque este nuevo estado trata de romper deliberadamente con la tradición histórica del primero, afectando principalmente la manera en la cual la sociedad se relaciona con el estado y consigo misma.

Una cuarta y última conclusión recrimina el hecho de que una de las constantes en la vida política del país ha sido su gran debilidad institucional y su

pésimo desempeño en cuanto se refiere a lograr mecanismos que permitan encauzar las demandas y reclamos de la sociedad civil hacia el estado a fin de buscar mejores mecanismos de diálogo y de solución para los mismos. Y es justamente en este último aspecto, a partir del esfuerzo conjunto de los bolivianos, que se puede incidir de una manera determinante y positiva para la consecución de estos fines.

Anexo

Características generales de los conflictos por período (1970 – julio 1998)

| # casos % columna | | PERIODOS | | | | | | | TOTAL |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| | | (1) 1-I-1970 a 20-VIII-1971 | (2) 21-VIII-1971 a 21-VII-1978 | (3) 22-VII-1978 a 17-VII-1980 | (4) 18-VII-1980 a 10-X-1982 | (5) 11-X-1982 a 4-VIII-1985 | (6) 5-VIII-1985 a 6-VIII-1993 | (7) 7-VIII-1993 a 31-VII-1998 | |
| Grupo Social Líder (agrupado) | Obreros | 126 17,2 | 197 20,7 | 132 21,1 | 140 29,1 | 398 21,8 | 487 22,7 | 198 22,5 | 1678 21,9 |
| | Campeñinos tradicionales | 54 7,4 | 30 3,2 | 20 3,2 | 6 1,2 | 60 3,3 | 40 1,9 | 20 2,3 | 230 3 |
| | Campeñinos del trópico | 11 1,5 | 3 0,3 | 1 0,2 | 0 0 | 23 1,3 | 46 2,1 | 52 5,9 | 136 1,8 |
| | Sectores populares | 17 2,3 | 21 2,2 | 24 3,8 | 12 2,5 | 122 6,7 | 43 2 | 28 3,2 | 267 3,5 |
| | Sectores medios | 410 55,9 | 567 59,6 | 362 57,8 | 250 52 | 1044 57,2 | 1110 51,7 | 326 37 | 4069 53,2 |
| | Militantes políticos | 11 1,5 | 19 2 | 7 1,1 | 7 1,5 | 30 1,6 | 11 0,5 | 13 1,5 | 98 1,3 |
| | Ciudadanía en gnrl. | 45 6,1 | 43 4,5 | 38 6,1 | 17 3,5 | 61 3,3 | 177 8,2 | 93 10,6 | 474 6,2 |
| | Sectores excluidos | 35 4,8 | 23 2,4 | 10 1,6 | 19 4 | 25 1,4 | 115 5,4 | 40 4,5 | 267 3,5 |
| | Otros | 25 3,4 | 47 4,9 | 32 5,1 | 30 6,2 | 52 2,8 | 115 5,4 | 111 12,6 | 412 5,4 |
| Objetivo Principal (agrupado) | Político institucional | 141 19,2 | 238 25 | 86 13,7 | 63 13,1 | 163 8,9 | 138 6,4 | 94 10,7 | 923 12,1 |
| | Luchas sociales | 120 16,3 | 61 6,4 | 58 9,3 | 24 5 | 200 11 | 150 7 | 63 7,2 | 676 8,8 |
| | Política coyuntural | 101 13,8 | 151 15,9 | 63 10,1 | 57 11,9 | 215 11,8 | 401 18,7 | 311 35,3 | 1299 17 |
| | Luchas económicas | 305 41,6 | 366 38,4 | 346 55,3 | 295 61,3 | 1027 56,3 | 964 44,9 | 254 28,8 | 3557 46,5 |
| | Luchas organizativas | 28 3,8 | 86 9 | 31 5 | 21 4,4 | 104 5,7 | 188 8,8 | 56 6,4 | 514 6,7 |
| | Estatismo | 3 0,4 | 0 0 | 4 0,6 | 7 1,5 | 69 3,8 | 227 10,6 | 81 9,2 | 391 5,1 |
| | Otros | 31 4,2 | 41 4,3 | 36 5,8 | 13 2,7 | 41 2,2 | 79 3,7 | 22 2,5 | 263 3,4 |
| Manifestación Dominante | Paro cívico | 12 1,6 | 16 1,7 | 26 4,2 | 16 3,3 | 41 2,2 | 96 4,5 | 57 6,5 | 264 3,5 |
| | Huelga tiempo definido | 123 16,8 | 349 36,7 | 169 27 | 138 28,7 | 412 22,6 | 500 23,3 | 164 18,6 | 1855 24,3 |
| | Huelga tiempo indefinido | 149 20,3 | 218 22,9 | 204 32,6 | 149 31 | 576 31,6 | 358 16,7 | 54 6,1 | 1708 22,3 |
| | Huelga de hambre | 67 9,1 | 80 8,4 | 97 15,5 | 72 15 | 202 11,1 | 346 16,1 | 194 22 | 1058 13,8 |
| | Bloqueo vías urbanas | 19 2,6 | 19 2 | 17 2,7 | 8 1,7 | 71 3,9 | 34 1,6 | 22 2,5 | 190 2,5 |
| | Bloqueo vías rurales | 16 2,2 | 15 1,6 | 19 3 | 3 0,6 | 68 3,7 | 34 1,6 | 26 3 | 181 2,4 |
| | Marchas y manifestaciones | 118 16,1 | 119 12,5 | 57 9,1 | 57 11,9 | 243 13,3 | 603 28,1 | 325 36,9 | 1522 19,9 |
| | Tomas, intervenciones | 178 24,3 | 37 3,9 | 18 2,9 | 16 3,3 | 135 7,4 | 63 2,9 | 23 2,6 | 470 6,1 |
| | Huelga de brazos caídos | 8 1,1 | 19 2 | 6 1 | 17 3,5 | 46 2,5 | 43 2 | 3 0,3 | 142 1,9 |
| | Estado de emergencia | 19 2,6 | 62 6,5 | 11 1,8 | 2 0,4 | 1 0,1 | 27 1,3 | 2 0,2 | 124 1,6 |
| | Otros | 25 3,4 | 17 1,8 | 2 0,3 | 3 0,6 | 29 1,6 | 44 2 | 11 1,2 | 131 1,7 |
| TOTAL | | 734 | 952 | 626 | 481 | 1825 | 2148 | 881 | 7647 |
| % de la fila | | 9,6 | 12,4 | 8,2 | 6,3 | 23,9 | 28,1 | 11,5 | 100 |

CRISIS Y CONFLICTO EN EL CAPITALISMO LATINOAMERICANO

| # casos % columna | | PERIODOS | | | | | | | TOTAL | |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| | | (1) 1-I-1970 a 20-VIII-1971 | (2) 21-VIII-1971 a 21-VII-1978 | (3) 22-VII-1978 a 17-VII-1980 | (4) 18-VII-1980 a 10-X-1982 | (5) 11-X-1982 a 4-VIII-1985 | (6) 5-VIII-1985 a 6-VIII-1993 | (7) 7-VIII-1993 a 31-VII-1998 | | |
| Adversario | Estado | 412 56,1 | 553 58,1 | 340 54,3 | 323 67,2 | 1069 58,6 | 1487 69,2 | 663 75,3 | 4847 63,4 | |
| | Policia | 12 1,6 | 22 2,3 | 8 1,3 | 7 1,5 | 11 0,6 | 4 0,2 | 2 0,2 | 66 0,9 | |
| | Estado a nivel local | 96 13,1 | 163 17,1 | 90 14,4 | 46 9,6 | 272 14,9 | 192 8,9 | 105 11,9 | 964 12,6 | |
| | Empresas del Estado | 53 7,2 | 54 5,7 | 44 7 | 30 6,2 | 173 9,5 | 313 14,6 | 54 6,1 | 721 9,4 | |
| | Empresa privada | 59 8 | 52 5,5 | 42 6,7 | 30 6,2 | 140 7,7 | 68 3,2 | 20 2,3 | 411 5,4 | |
| | Comerciantes | 1 0,1 | 1 0,1 | 1 0,2 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0,1 | 4 0,1 | |
| | Transportistas | 7 1 | 4 0,4 | 2 0,3 | 10 2,1 | 19 1 | 2 0,1 | 1 0,1 | 45 0,6 | |
| | Otros | 82 11,2 | 79 8,3 | 90 14,4 | 35 7,3 | 122 6,7 | 52 2,4 | 21 2,4 | 481 6,3 | |
| | Resultado del Conflicto | Consigue objetivos | 97 13,2 | 153 16,1 | 87 13,9 | 66 13,7 | 229 12,5 | 117 5,4 | 29 3,3 | 778 10,2 |
| | | Consigue algunos | 143 19,5 | 135 14,2 | 102 16,3 | 78 16,2 | 260 14,2 | 298 13,9 | 87 9,9 | 1103 14,4 |
| | | No consigue nada | 57 7,8 | 59 6,2 | 20 3,2 | 26 5,4 | 103 5,6 | 141 6,6 | 76 8,6 | 482 6,3 |
| | | Sin información | 437 59,5 | 605 63,6 | 417 66,6 | 311 64,7 | 1233 67,6 | 1592 74,1 | 689 78,2 | 5284 69,1 |
| Lugar del Conflicto (agrupado) | | Urbano | 545 74,3 | 710 74,6 | 462 73,8 | 349 72,6 | 1255 68,8 | 1192 55,5 | 535 60,7 | 5048 66 |
| | | Rural | 136 18,5 | 187 19,6 | 87 13,9 | 56 11,6 | 219 12 | 292 13,6 | 92 10,4 | 1069 14 |
| | Departamental | 14 1,9 | 32 3,4 | 13 2,1 | 17 3,5 | 127 7 | 330 15,4 | 141 16 | 674 8,8 | |
| | Nacional | 39 5,3 | 23 2,4 | 64 10,2 | 59 12,3 | 224 12,3 | 334 15,5 | 113 12,8 | 856 11,2 | |
| TOTAL | | 734 | 952 | 626 | 481 | 1825 | 2148 | 881 | 7647 | |
| % de la fila | | 9,6 | 12,4 | 8,2 | 6,3 | 23,9 | 28,1 | 11,5 | 100 | |

Fuente: elaboración propia, base de datos de conflictos sociales del CERES.

Bibliografía

Calderón, Fernando y Alicia Szmukler 2000 *La política en las calles* (La Paz: CERES-PLURAL-UASB).

Calderón, Fernando y Roberto Laserna 1983 "Nación, Estado y movimientos sociales regionales en Bolivia (1971-1983)", trabajo presentado al Seminario *Movimientos Sociales en América Latina* (San José de Costa Rica: Universidad de Naciones Unidas-FLACSO) 21 al 24 de noviembre.

Calderón, Fernando y Roberto Laserna 1995 *Paradojas de la modernidad* (La Paz: CERES-Fundación Milenio-Los Amigos del Libro).

Grebe López, Horst 1987 "El excedente sin acumulación. La génesis de la crisis económica actual", en *Bolivia, hoy* (México: Siglo XX).

Laserna, Roberto 1986 *La acción social en Cochabamba (1970-1985). Una aproximación cuantitativa* (Cochabamba: CERES).

Mayorga, René Antonio 1985 "La crisis del sistema democrático y la Central Obrera Boliviana (COB)", en Comisión de Movimientos Laborales de CLACSO (comp.) *El sindicalismo latinoamericano en los ochenta*, ponencias presentadas al seminario de la Comisión De Movimientos Laborales de CLACSO en mayo de 1985 (Santiago de Chile: CLACSO).

Mayorga Ugarte, José Antonio 1999 "Los medios de comunicación como generadores de conflicto", ponencia presentada en el *Curso de formación: El conflicto entre la información y la desinformación* (Cochabamba: CERES-Universidad Católica Boliviana).

Notas

1 El Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES) es una organización académica dedicada a la investigación, el análisis y la difusión de los problemas en Bolivia. Desarrolla investigaciones en sociología, economía, antropología y política; realiza estudios de consultoría especializada, y apoya a organizaciones de base. Vale la pena aclarar en este punto que el autor del presente trabajo tomó parte activa en la elaboración de esta base de datos sobre conflictos durante las etapas de recolección de datos, procesamiento y análisis de los mismos.

2 A este respecto, René A. Mayorga (1985) sostiene que la predisposición de los actores sociales bolivianos para convertir las diferencias y los conflictos en contradicciones antagónicas es debido a que prevalecen ciertas pautas provenientes de dos culturas o tradiciones políticas opuestas, pero que constituyen principios profundos que hacen a la práctica política del país. La primera de ellas “de carácter patrimonialista y personalista, caracteriza a intelectuales de la clase política de origen señorial, quienes asumen y defienden las ideologías de una manera acrítica y dogmática”. La segunda, propia de las clases subalternas de origen étnico y cultural indígena, está fuertemente marcada por la presencia de elementos tales como la movilización y la acción directa, la visión del poder como ocupación y control de espacios sociales y geográficos, y la política como defensa e imposición de intereses transgredidos.

3 La codificación de los *grupos sociales* que intervienen en los conflictos responde a los siguientes criterios de agrupación:

- Obreros: mineros, fabriles, de la construcción, petroleros, ferrocarriles, etc.
- Campesinos tradicionales: altiplano, valles, serranías.
- Colonizadores campesinos: trópico, cocaleros.
- Sectores populares urbanos: vecinos, amas de casa, artesanos y otros no asalariados.
- Sectores medios: magisterio, bancarios, estudiantes, profesionales, empleados públicos y privados, docentes y trabajadores universitarios, pequeños comerciantes, transportistas.
- Militantes políticos.
- Ciudadanía en general: esto supone grupos ciudadanos indiferenciados.
- Excluidos: despedidos, desempleados, relocalizados, rentistas, excombatientes, jubilados.

A su vez, los *objetivos* perseguidos por los actores en conflicto social se codificaron de la siguiente manera:

- Político institucional: libertades democráticas, derechos humanos, vigencia de leyes, normas, convenios.
- Luchas sociales: mayor participación en decisiones gubernamentales, participación en gestión empresarial, expropiación-apropiación de bienes.

- Política coyuntural: apoyo a o rechazo a políticas gubernamentales o a sus funcionarios.
- Luchas económicas: solicitud de apoyo regional, mejoras salariales, de consumo, costo de vida, condiciones laborales, beneficios sociales, estabilidad laboral, fuentes de trabajo, etc.
- Luchas organizativas: conflicto intra-organización, solidaridad (intra/inter-sectorial).
- Estatismo: solicitud de apoyo estatal a empresa o institución, desembolsos, fondos a gremio o sector, ello siguiendo la lógica del estado benefactor.

4 La mayor parte de los datos a los que se hace mención a partir de este momento se hallan sistematizados y expuestos en los cuadros que aparecen al final de este trabajo. Si algunas cifras no se hallan detalladas en dichos cuadros, ello obedece a los límites de extensión que son prerrogativa para la presentación del mismo.

5 Este término se aplica a los campesinos occidentales, de la zona andina boliviana, y en oposición a los campesinos y colonizadores del trópico y los llanos orientales.